



RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010017565 DEL 28/05/2014
POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265 del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - C.P.A.C.A., para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de GACHALÁ, del departamento de CUNDINAMARCA, es de categoría 6 y como prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a 31 de diciembre de 2012, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos revistos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010005435, del 7 de marzo de 2014, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de GACHALÁ, del departamento de CUNDINAMARCA, por no haber cumplido los siguientes criterios previstos en el artículo 3° del Decreto 1639 de 2013:

a) Reporte al SUI de la suscripción de los contratos en la zona urbana a que se refiere el artículo 99.8 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 11 del Decreto número 565 de 1996 o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, o alguno de los siguientes documentos que soporten:

- a) Giro directo al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
- b) Giro de recursos al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a través del esquema fiduciario constituido en el marco del PAP-PDA.
- c) Certificación emitida por el prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en donde certifique el monto del giro de los recursos destinados al pago de los subsidios;

b) Reporte al SUI del Acuerdo Municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, el cual deberá estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complemente o sustituya. En caso de no poder acreditar el criterio de la forma descrita, podrá:

- a) Reportar en el SUI el formato Balance Subsidios y Contribuciones de la vigencia a certificar, o,
- b) Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios en la vigencia a certificar.

2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010005435 del 7 de marzo de 2014

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010005435, del 7 de marzo de 2014, se envió citación al señor alcalde del municipio de GACHALÁ, del departamento de CUNDINAMARCA, mediante el oficio No. SSPD 20144010127671, del 7 de marzo de 2014, enviado por correo certificado el 14 de marzo de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Transcurrido el término para que el representante legal del ente territorial compareciera a notificarse personalmente del contenido de la Resolución SSPD No. 20144010005435, sin que ello ocurriera, se procedió a enviar el respectivo aviso de notificación mediante el oficio No. SSPD 20144010162561, del 20 de marzo de 2014. De acuerdo a la información remitida por la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. éste documento fue entregado el día 01 de abril de 2014 en la Alcaldía Municipal, por lo tanto y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la notificación se considera surtida al día siguiente de su entrega en el lugar de destino.

Ahora bien, el señor Pedro Antonio Rodríguez Rojas, en su calidad de alcalde del municipio de GACHALÁ, del departamento de CUNDINAMARCA, mediante documentos radicados en esta entidad bajo los números SSPD 20145290180722 del 11 de abril de 2014 y 20145290207492 del 28 de abril de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010005435 del 7 de marzo de 2014.

III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

3.1 Verificación de los requisitos de forma

El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos; los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de GACHALÁ, del departamento de CUNDINAMARCA, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal; por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, los escritos radicados con los Nos. SSPD 20145290180722, del 11 de abril de 2014, y 20145290207492, del 28 de abril de 2014, reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A., por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

3.2 Argumentos del recurrente

Como argumentos del recurso sustentado con el No. SSPD 20145290180722, del 11 de abril de 2014, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

"Al respecto es preciso hacer una retrospectiva de lo acontecido a fin de indicar los motivos que justifican el no cumplimiento con la puesta en funcionamiento del FSRJ, de la siguiente manera:

Al momento de presentarse la documentación requerida para el cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 1639 de 2013, se realizó el cargue de la información de acuerdo a lo soportado para la vigencia teniendo en cuenta que el municipio fue descertificado para la vigencia 2011, y qué todo el proceso de administración de los recursos pasó a ser dirigido por la Gobernación de Cundinamarca.

Con base en lo anterior es importante resaltar que la actual administración desde el momento mismo de su inicio (enero de 2012), realizó los esfuerzos necesarios siendo consciente de la necesidad de cumplir a cabalidad con los requerimientos definidos por la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para conseguir la certificación. Muestra de lo anterior fue todo el plan de trabajo desarrollado durante la vigencia 2012, para cumplir uno a uno con lo estipulado, como tal es el caso del agotamiento del artículo 6 de la Ley 142 de 1994, la aprobación del acuerdo de subsidios y contribuciones, la aplicación de la metodología para las tarifas de acuerdo a resoluciones de la CRA; el cumplimiento de porcentaje de cargue de la información técnico operativa y comercial requerida en el SUI, la certificación sanitaria; entre otros.

Aunque el desarrollo de estas actividades se realizaba de acuerdo con el plan de trabajo trazado, de manera conjunta también se tenía que realizar un proceso con la comunidad para su socialización, concientización y puesta en marcha de los nuevos parámetros de las tarifas y el funcionamiento de la oficina. De otro lado había que realizar la estructuración de la Oficina de Servicios Públicos, incluso hasta la adecuación de los espacios físicos para su funcionamiento administrativo, y comercial, teniendo en cuenta los cambios ineludibles que conllevaba la prestación directa de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y el impacto socio-económico de gran magnitud que se causaba en la comunidad del municipio, en su momento. De ser necesario, estamos en disposición de allegar la información correspondiente a los avisos de convocatorias y las correspondientes planillas de asistencia a las charlas de concientización.

De acuerdo a las proyecciones de cumplimiento estipuladas por el grupo de trabajo de la administración central del municipio, una de las posibles deficiencias radicaba en que aunque el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos estaba creado mediante Acuerdo Municipal N° 16 del 10 de Septiembre de 1999, este fondo no estaba en funcionamiento por razones expuestas ante la Superintendencia de Servicios Públicos mediante los Oficios DA-CE-6-2-223-2013 de fecha 11 de junio de 2013, radicado ante la Superservicios bajo el número 20135290293562 y Oficio DA-CE-6-2-244-2013, de fecha 21 Junio de 2013, radicado ante la Superservicios bajo el número 20135290314352. (Se anexan copias de los citados oficios).

En estas comunicaciones se indicaba que si bien es cierto el compromiso de la administración estaba centrado en la certificación para la vigencia 2012, el cumplimiento de la metodología exigida por el Decreto 1013 de 2005, para el giro de los recursos a la oficina de servicios públicos no se podría cumplir, dado el proceso de implementación y estructuración tanto de la oficina como del cobro de los servicios y estructura tarifaria que se adelantaba; en tal virtud se pedía no se tuviera en cuenta dicho requerimiento para la certificación 2012.

En atención a los radicados anteriores, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para dar respuesta profirió los oficios N° 20134010436501 y No. 20134010412631, los cuales literalmente no difieren uno del otro en donde se señaló:

'... Ahora bien, en cuanto a las aclaraciones señaladas en el oficio de la referencia le informo que esta entidad tiene conocimiento de las aclaraciones señaladas por usted, por lo tanto procederá a incluir esta información en el expediente relacionado con el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del sistema general de Participaciones de su municipio, además se tendrá en cuenta en el periodo probatorio que si es necesario se decretaría dentro del procedimiento administrativo que esta Superintendencia adelantará, en virtud de las facultades establecidas en el artículo 11 del Decreto 1040 de 2012, así:

'La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la autoridad competente para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones para el Agua Potable y Saneamiento Básico, podrán verificar cualquier medio de la información reportada por las entidades territoriales respeto de lo que compete en materia de certificación. Para ello podrán entre otras: solicitar soportes adicionales, confrontar información reportada con las fuentes y adelantar la constitución de pruebas adicionales para la verificación de la información reportada'. (Se anexan copia de sus comunicaciones).

Con base a las anteriores respuestas dadas en su momento frente a la necesidad del municipio por obtener la certificación, no es consecuente tomar este hecho como causal de descertificación del municipio, teniendo en cuenta además que:

La Alcaldía Municipal de Gachalá fue descertificada para la vigencia 2011, por lo tanto los recursos del Sistema General de Participaciones con los cuales contaba el municipio fueron entregados para su administración a la Gobernación de Cundinamarca.

El proceso o metodología exigida por el Decreto 1013 de 2005, se realizó a partir de la vigencia 2012, más concretamente a partir del mes de mayo, con lo cual se buscaba cumplir a cabalidad con los requerimientos del Decreto 1639 de 2013 y todo lo relacionado en la Ley 142 de 1994.

Con referencia al giro de los subsidios, no podría hacerlo sin contar con las tareas de socialización y concientización realizadas con la comunidad, ni tampoco con los soportes técnicos, de infraestructura, operativos y jurídicos, porque de lo contrario se podría infringir la normatividad legal vigente para el caso. Todas estas tareas igualmente fueron iniciadas a partir del año 2012.

Consideramos oportuno traer a colación como antecedente el concepto 363 del 24 de junio de 2010, expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, solicitado por la asesora Jurídica del municipio de Copacabana Antioquia y contestada por los doctores María del Carmen Santana Suárez y Andrés David Ospina Riaño Asesores de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos, en donde se consultó: "...si la alcaldía municipal puede firmar convenio interadministrativo al Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos (FSRI) y realizar desembolsos de los subsidios solicitados por una asociación, en su calidad de organización comunitaria sin ánimo de lucro prestadora de los servicios públicos y en caso de que sea positiva, que requisitos debe exigir el municipio a la asociación..." Ante lo cual se respondió lo siguiente:

"(...) En este orden de ideas, esta Oficina considera que, sin perjuicio de lo que dispongan otras normas legales vigentes, los prestadores de servicios públicos, antes del 15 de julio de cada año deberán solicitar el otorgamiento de subsidios, a través de la dependencia que administra el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, para lo cual contará con la siguiente información:

Proyección de usuarios y consumos

Debe tener una estructura tarifaria vigente

Debe aplicar y conocer el porcentaje o factor de Aporte Solidario en el año respectivo

Debe realizar una estimación para el año siguiente del monto total de los recursos potenciales a recaudar por concepto de aportes solidarios

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

Debe contar con la información relativa al número total de usuarios atendidos, discriminados por servicio, estrato y uso.

Para los servicios de acueducto y alcantarillado, debe realizar la desagregación de consumos y vertimientos, según rango básico, complementario o suitario.

Para el servicio de aseo, deberá reportar los resultados de aforo de grandes generadores y la información de los pequeños productores y multiusuarios que lo hayan solicitado."

De acuerdo al análisis y las conclusiones del concepto emitido en relación con el municipio de Copacabana, con referencia al municipio de Gachalá, se tiene que el mismo le aplica, en el entendido que es claro que para el otorgamiento o giro de los Subsidios, es necesario cumplir conforme lo estipula la normatividad vigente, en especial con el artículo 15 de la Ley 142 y el artículo 2° del Decreto 1013 de 2005, (metodología para la determinación del equilibrio).

Del mismo modo, debe cumplirse con una serie de información y soportes, tales como: proyección de usuarios y consumos, estructura tarifaria vigente, aplicación del porcentaje o factor de Aporte Solidario en el año respectivo, contar con la información relativa al número total de usuarios atendidos, discriminados por servicio, estrato y uso, entre otras. Como ya se dijo en acápite anteriores durante el año 2012, el municipio se dio a la tarea de estructurar y poner en marcha la oficina de servicios públicos, razón por la cual no era lógico que asumiéramos la administración de los recursos sin tener plenamente implementada esta dependencia que como ya se dijo antes, solo hasta el mes de Diciembre del año de 2012, se pudo finalizar este proceso.

Aparte de lo anterior, hay que tener en cuenta que hubo la necesidad de generar un proceso de empalme entre el municipio y la Gobernación quien debido a la desertificado (sic) no tenía (sic) el manejo de estos recursos, proceso que fue dispendioso no solo con nuestro municipio, sino con los demás desertificados; muestra de lo anterior fueron todas las mesas de trabajo desarrolladas por la Gobernación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Procuraduría General de la Nación, los municipios de Cundinamarca desertificados (sic) para la vigencia 2011, y la Superservicios.

Finalmente, y debido a los procesos administrativos se pudo realizar el cobro de estos recursos hasta el 04 de Julio de 2013, mediante cuenta de cobro por un valor total de 27.793.102.00 valor que fue consignado en el mes de Octubre de 2013, a la Cuenta de la Oficina de servicios Públicos N° 0-3134-000852-8 del Banco Agrario, según consta en extracto bancario de este total se pagaron por la vigencia 2012 los subsidios para Acueducto por un valor de \$1.731.879.00, para alcantarillado \$672.866.00 y aseo \$3.132.849.00 para un valor total de \$5.547.494,00, para soportar dicha información se solicitó certificación a la Gobernación de Cundinamarca el día 5 de marzo de 2014. Así las cosas, no era posible entrar a cumplir con los requisitos exigidos para el giro de los recursos en el año 2012, si los mismos solamente fueron desembolsados hasta el mes de octubre del año 2013. (Se anexa copia de la cuanta de cobro y de la certificación de los giros).

SEGUNDO: La Resolución No. SSPD-20144010005435 del 07-03-2014,- indica en su parte considerativa también: (...)

Con base al documento soporte para el porcentaje de subsidios y contribuciones, si bien es cierto que el Acuerdo N° 13 del 19 de Mayo de 2012 por el cual fue aprobado el porcentaje de subsidios y contribuciones para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, no fue expedido de acuerdo a la Ley 1450 de 2011, puesto que señaló el porcentaje de contribución en un 10% para los estratos 5, 6, industrial y comercial. Se debe aclarar que dicho Acuerdo fue modificado por el Acuerdo 009 de mayo de 2013.

Con referencia al punto en donde se afirma que no se reportó al SUI el formato de balances y contribuciones se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Teniendo en cuenta las consecuencias de la desertificación para la vigencia 2011 la Gobernación de Cundinamarca asumió el manejo y administración de los recursos del Sistema General de Participaciones, fuente de la cual se tomaban los soportes

presupuestales para el pago de los subsidios a la Oficina de Servicios Públicos del municipio.

Con base a lo anterior y al proceso que conllevó el empalme entre el municipio y la Gobernación solamente se pudo generar cuenta de cobro en el mes de Julio del año 2013, para el pago de los subsidios correspondientes al periodo de la vigencia 2012, recursos que como ya se dijo fueron girados hasta el mes de octubre de 2013.

De acuerdo a lo anterior se solicitó mediante oficio con el radicado el 30 de Agosto del 2013 con el No. 20135290449282, dirigida al grupo de Certificaciones de la Superintendencia y oficio radicado el 30 de Agosto de 2013, con el No. 20135290449482 enviado al Coordinador del grupo SUI, la reversión del "formato de subsidios y contribuciones", para lo cual se aportaron todas las pruebas del caso, como consta en el anexo del oficio, (se debe tener en cuenta que para la presentación y/o solicitud de reversión la Superintendencia de Servicios Públicos es muy exigente en cuanto al manejo de la presentación y justificación idónea de la información a modificar), solicitud que fue aprobada de acuerdo a los datos presentados en el Formato de subsidios y contribuciones. (Se anexan copias).

Los mismos datos y valores presentados en las pruebas aportadas para reversión fueron cargados en el formato correspondiente de subsidios y contribuciones pero el sistema no lo validó porque aunque se cobraron los subsidios, no se giraron a la Oficina de Servicios Públicos en su momento, por lo cual no se tenía el valor a incluir, consecuentemente al no girarse los recursos correspondientes a los subsidios, no existía una fecha de giro de estos, fecha que pide el sistema y que debido a que en su momento no se realizó dentro de las fechas límites para la presentación de las pruebas para cargue (30 de agosto de 2013), sino que se efectuó hasta el mes de Octubre como consta en la certificación emitida por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación, conforme a lo requerido para certificación en la respectiva vigencia.

Estas inquietudes se presentaron en las diferentes mesas de trabajo que se realizaron en su momento con los municipios descertificados, la Superintendencia de Servicios Públicos y el MVCT, sin que la duda se aclarara a cabalidad. La argumentación verbal en su momento era que se trataba de un "Error del sistema", lo cual de cierto modo sí se puede asimilar.

En conclusión, se puede afirmar determinantemente que dichos recursos si fueron cobrados y fueron girados por la Gobernación a la Oficina de servicios públicos a través de la cuenta N° 0-3134-000852-8 del Banco Agrario en el mes de octubre de 2013, según consta en la certificación de la Gobernación, fecha en la cual los términos de ley ya no permitan realizar el aporte de pruebas para el proceso de certificación.

TERCERO: Aparte de los hechos y consideraciones anteriores es preciso también, - con respecto a los numerales 2 y 4 por los cuales se descertifica (sic) el municipio en la Resolución N° SSPD 20144010005435, del 07/03/2014 de la SUPERSERVICIOS, - identificar los siguientes aspectos, los cuales se señalan a continuación: (...)

En consecuencia con la comparación descrita entre los parámetros tenidos en cuenta por la Resolución SSPD 20144010005435, del 07/03/2014, de la Superintendencia de Servicios Públicos y el Decreto 1639 de 2013, se pide aclarar la no inclusión de literales. Tal es el caso del numeral 2 en su literal j, Certificación emitida por el prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en donde certifique el monto de los recursos destinados al pago de los subsidios en la respectiva vigencia (opción que no se permite cargar en el aplicativo SUI y que no fue considerada en la presente resolución). A su vez no haberse tenido en cuenta la opción prevista en el numeral 4 en caso de no contar con el acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia y las respectivas acreditaciones para certificar este requisito, para la vigencia 2012; sin que se haya tenido en cuenta las solicitudes y comunicados enviados en su momento por la Alcaldía.

Se reitera y se pide tener en cuenta las aclaraciones, conceptos, disposiciones legales y la garantía al debido proceso, -al haberse presentado por parte del municipio de Gachalá documentación que al parecer no fue tenida como material probatorio y por lo tanto objeto de análisis al momento del estudio previo a la expedición de la resolución motivo del presente recurso, pese a haberse dicho por parte de la SSPD que procedería a "... incluir esta información en el expediente relacionado con el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del sistema general de Participaciones de su municipio, ..."

Corolario de lo expuesto anteriormente, es que la Administración Municipal realizó todos los esfuerzos encaminados a obtener la certificación de la vigencia 2012, pero para lograrlo previamente tenía que agotar todo un proceso de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente, con el propósito de no ir a cometer errores de procedimiento en el manejo de estos recursos, por lo tanto era inoportuno y erróneo para la Alcaldía pretender el cobro y giro de subsidios con anterioridad a la aplicación de las metodologías necesarias para el giro y cobro de los subsidios, porque como tal no existía la oficina ni tampoco se podía crear de manera inmediata, por tal motivo consideramos desacertado que la SSPD, pueda entrar a sancionar al municipio vía descertificación, por la omisión de administraciones anteriores, en el entendido que es precisamente en el año 2012 cuando hubo cambio de gobierno municipal, si tanto el alcalde como su equipo de trabajo actual desde un primer momento realizaron los esfuerzos e hicieron las tareas que tuvo a su alcance para lograr la certificación de la vigencia 2012, como se evidencia en las evaluaciones integrales al prestador por parte de la Superintendencia y el cumplimiento en gran medida de los requisitos y esto no sea ni evaluado, valorado y reconocido.

Nótese que a partir de diciembre de 2012 la Oficina de Servicios Públicos ya encontrándose consolidada, ha venido acatando todas y cada una de las normas que le aplican y ha venido cumpliendo con los diferentes requerimientos para lograr la certificación de las vigencias posteriores".

Como argumentos del recurso sustentado con el No. SSPD 20145290207492 del 28 de abril de 2014, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

"Al respecto me permito informar que el municipio si dio cumplimiento a este requerimiento, lo cual se hizo a través de la anotación incluida el 31 de mayo de 2013 en aplicativo, donde se adjuntó el acuerdo No. 009 de 2013 el cual cumple con lo estipulado en la Ley 1450 de 2011, tal como puede observarse en la copia del pantallazo adjunta (resaltado azul). Por lo tanto no entendemos el porqué de su observación de fecha 27 de agosto de 2013 en la cual se indica que no se coincide de los porcentajes de acuerdo a la ley (se anexa copia del acuerdo N° 009 de 2013).

3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el documento radicado No. SSPD 20144010005435, del 7 de marzo de 2014, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegaron las siguientes pruebas:

3.3.1. Copia del radicado SSPD 20134010436501, del 16 de julio de 2013, por medio del cual esta superintendencia dio respuesta al radicado SSPD 20135290293562, del 19 de junio de 2013. (Folios 16-17).

3.3.3. Copia del oficio DA-CE-6-2-223-2013, de fecha 11 de junio de 2013, dirigido a esta entidad y radicado con el No. SSPD 20135290293562, del 19 de junio de 2013. (Folios 18-21).

3.3.4. Copia de una cuenta de cobro de fecha 4 de julio de 2013, por concepto de subsidios para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Gachalá, correspondiente a los periodos facturados de los meses de diciembre 2012, enero 2013, febrero 2013, marzo 2013 y abril 2013 con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones, agua potable y saneamiento básico. (Folios 22-23).

3.3.5. Certificación expedida el 7 de abril de 2014, por la Directora Financiera de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en la que señaló *"Que revisando los movimientos de la cuenta de ahorros N° 513-80567-1 del Banco de Occidente denominada Departamento de Cundinamarca administración agua potable y saneamiento básico municipio de Gachalá, se realizaron los siguientes giros a la cuenta del banco agrario (...) a nombre de la Oficina de Servicios Públicos de Gachalá (...)"*. (Folio 24).

3.3.6. Oficio del 29 de agosto de 2013, suscrito por el alcalde Gachalá y dirigido a Coordinador del Grupo SUI de la SSPD. (Folios 25-27).

3.3.7. Oficio del 29 de agosto de 2013, suscrito por el alcalde Gachalá y dirigido a Coordinador del Grupo Certificaciones de la SSPD. (Folios 28-29).

3.3.8. Oficio SSPD No. 20131800559831 del 03 de septiembre de 2013, por medio del cual el Coordinador del Grupo SUI dio respuesta al radicado SSPD 20135290449482 del 30 de agosto de 2013. (Folios 30-31).

3.3.9. Pantallazos del SUI – Aplicativo INSPECTOR. (Folio 4).

3.3.10. Acuerdo No. 009 del 25 de mayo de 2013, *"Por el cual se modifica y adiciona los acuerdos N° 013 de 19 de mayo de 2012 y 030 del 17 de noviembre de 2012, en lo que hace referencia a la asignación de los factores de subsidio para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Gachalá y se dictan otras disposiciones"*. (Folios 5-8).

3.3.11. Acta No. 007 del 15 de mayo de 2013, de la Comisión Tercera de Presupuesto y Hacienda Pública. (Folio 9).

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

4.1. Frente a los argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el funcionamiento del FSRI.

En primer lugar, esta superintendencia no desconoce los ingentes esfuerzos que el municipio de Gachalá realizó para obtener la certificación en el SGP-APSB, vigencia 2012, sin embargo, no puede tener como válidas las razones que alega para justificar el no cumplimiento del criterio de puesta de funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos – FSRI, toda vez que indica que pese a que el referido Fondo estaba creado mediante Acuerdo Municipal N° 16 de septiembre de 1999, éste no funcionaba, y por tanto no podía cumplir la metodología del Decreto 1013 de 2005 frente al giro de recursos, dado el proceso de socialización y concientización a la comunidad frente a los nuevos parámetros de la estructura tarifa y la entrada en funcionamiento de la Oficina de Servicios Públicos.

Para esta entidad los hechos manifestados por la parte recurrente, encajan dentro del principio general del derecho conforme al cual nadie puede alegar en su favor su propia culpa (*Nemo auditur propriam turpitudinem allegans*); en efecto, el municipio es responsable por la omisión de los hechos que alega, y por consiguiente, no puede pretender desplazar su responsabilidad, cuando el mismo ente territorial fue quien generó el incumplimiento de la puesta de funcionamiento del FSRI luego de más de 10 años de su creación.

Ahora, en cuanto a las respuestas que este ente de control emitió frente a las peticiones elevadas por el ente municipal en el marco del proceso de certificación, aquellas (las respuestas), le indicaban el trámite que surte la SSPD, en virtud de tal proceso, pero en momento alguno se anunció que las circunstancias que esbozaba el municipio en sus peticiones, fueran causal para que, en palabras del mismo recurrente: "no se tuviera en cuenta dicho requerimiento para la certificación 2012".

Así las cosas tales exculpaciones no son de recibo por parte de esta entidad.

En segundo lugar, el otro argumento que manifiesta el impugnante, es que el municipio de Gachalá por encontrarse descertificado para la vigencia 2011, no tenía la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para la vigencia 2012, y por consiguiente, no se le podía exigir el cumplimiento del criterio señalado en el artículo 3° del Decreto 1639 de 2013, relacionado con la puesta de funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos – FSRI.

De acuerdo con lo alegado por el recurrente, considera esta entidad que no le asiste razón atendiendo lo siguiente:

Esta superintendencia mediante resolución SSPD 20124010035985, expedida el 19 de noviembre de 2012, descertificó al municipio de Gachalá para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones en agua potable y saneamiento básico, vigencia 2011.

Ahora bien, en contra del referido acto administrativo el ente territorial interpuso recurso de reposición con el documento radicado No. SSPD 20125290621502, del 10 de diciembre de 2012, el cual fue resuelto por esta entidad mediante Resolución SSPD No. 20134010001665 del 05 de febrero de 2013, confirmando el acto objeto de recurso.

La Resolución SSPD No. 20134010001665 del 05 de febrero de 2012, se notificó personalmente a la apoderada del municipio de Gachalá, el día 09 de abril de 2013, razón por la que dicho acto cobró firmeza el 10 de abril de 2013, dado que no procedía ningún recurso en su contra por estar concluido el procedimiento administrativo.

Con base en lo anterior, es necesario precisar que si bien el municipio de Gachalá, fue descertificado para la vigencia 2011, al haber cobrado firmeza el acto de descertificación hasta el 10 de abril de 2013, se entiende que para el año 2012 el municipio administró los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, lo que le impuso la obligación de acreditar el criterio que ahora impugna.

En relación con los efectos del proceso de certificación, respecto de la administración de los recursos de un municipio descertificado, el Decreto 1040 de 2012 en su artículo 13, dispuso:

"Artículo 13. Efectos del proceso de certificación. (...)

Los municipios y distritos que como resultado del proceso a que se refiere este título sean descertificados, no podrán administrar los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, ni realizar nuevos compromisos con cargo a los mismos desde la fecha en que quede ejecutoriado el acto administrativo expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en que se decida la descertificación. En consecuencia, los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico asignados al municipio o distrito descertificado, serán administrados por el departamento que asuma las competencias previstas en el artículo 5° de la Ley 1176 de 2007 o la norma que la modifique, complementé o sustituya". (La subraya y negrilla es nuestra).

Así mismo, en relación con este tópico, el artículo 6 del Decreto 1639 de 2013 señaló:

*"**PARÁGRAFO.** Al municipio o distrito que se encuentre descertificado y en consecuencia haya perdido las competencias para administrar los recursos del Sistema General de Participaciones del sector y asegurar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, no se le tendrá en cuenta para efectos de la recertificación el cumplimiento de los requisitos y criterios relacionados con los aspectos: "Destinación y giro de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico, con el propósito de financiar actividades elegibles conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007", "Creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos" y "Cumplimiento de lo establecido en el artículo 6o de la Ley 142 de 1994".*

Respecto de aplicación de este parágrafo, ha de advertirse que sólo resulta aplicable a los municipios descertificados respecto del proceso de certificación de la vigencia 2010, llevado a cabo en la vigencia 2011 y con efectos en el 2012. Frente a este tópico, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, mediante oficio radicado en esta entidad con el No. SSPD 20135290546992 del 21 de octubre de 2013, expresó:

"Teniendo en cuenta que para el caso concreto de su consulta, la vigencia a certificar es el 2012, el parágrafo transcrito debe ser interpretado con lo preceptuado en los artículos 1° y 6°, y en ese sentido, aplicaría a aquellos municipios y distritos que fueron descertificados para administrar los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico y asegurar la prestación en dicha vigencia.

Lo anterior, toda vez que para dar cumplimiento a los requisitos señalados en el parágrafo las autoridades deben contar con las competencias suficientes para adelantar las acciones encaminadas a su cumplimiento, situación que no se predica de las entidades territoriales descertificadas quienes no pueden manejar los recursos del SGP-APBS, comprometer recursos de esta fuente ni garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico.

Así las cosas y de acuerdo con la información remitida por ustedes, en la vigencia 2012 fueron descertificados 31 municipios, los cuales perdieron competencias indispensables para el cumplimiento de algunos de los requisitos establecidos para la certificación"

En ese contexto, aquellos municipios que en el año 2012 no tuvieron la administración de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico como resultado del proceso de certificación adelantado en la vigencia 2011, en relación con la vigencia 2010, estaban imposibilitados para acreditar los aspectos a los que hace referencia el Decreto 1639 de 2013 correspondientes a: "i) Destinación y giro de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico, ii) creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos y iii) Cumplimiento de lo establecido en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994.", puesto que el cumplimiento de estos aspectos, eran competencia del departamento, según lo establecido en los artículos 13 y siguientes del Decreto 1040 de 2012.

Por lo tanto, se reitera, si bien el ente territorial se descertificó para la vigencia 2011, la administración de los recursos de SGP-APSB para esa vigencia, la asumió el departamento de Cundinamarca en el año 2013, a partir de la fecha en que quedó ejecutoriado el acto administrativo expedido esta entidad; por ello durante el año 2012, el municipio de Gachalá tenía la administración de los recursos del SGP-APSB.

Y refuerza lo anterior, la cuenta de cobro que anexó el ente territorial con su recurso, de fecha 04 de julio de 2013, en la que el municipio le cobra al departamento por concepto de subsidios los meses de diciembre de 2012, enero de 2013, febrero de 2013, marzo de 2013 y abril de 2013, y en la certificación expedida el 7 de abril de 2014, por la directora financiera de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del departamento de Cundinamarca, en la que señaló "Que revisando los movimientos de la cuenta de ahorros N° 513-80567-1 del Banco de Occidente denominada Departamento de Cundinamarca administración agua potable y saneamiento básico municipio de Gachalá, se realizaron los siguientes giros a la cuenta del banco agrario:

FECHA DE GIRO	VALOR DEL GIRO	CONCEPTO
29/10/2013	27.793.102	Pago subsidios acueducto alcantarillado y aseo correspondientes a los meses de: Diciembre de 2012 y Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2013
30/12/2013	27.616.537	Pago subsidios acueducto alcantarillado y aseo correspondientes a los meses de: Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2013

Es decir, el departamento de Cundinamarca le giró en el mes de octubre de 2013 al municipio de Gachalá no los subsidios del año 2012, sino los subsidios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del

año 2013, y el mes de diciembre de 2012; y tal procedimiento se realizó así, porque la administración de los recursos del SGP-APBS, vigencia 2011, del municipio de Gachalá pasaron al departamento de Cundinamarca en el año 2013, y no el año 2012, como lo quiere hacer ver el recurrente.

Por esta razón no se entiende por qué el municipio alega que *"no era posible entrar a cumplir con los requisitos exigidos para el giro de los recursos en el año 2012, si los mismos solamente fueron desembolsados hasta el mes de octubre del año 2013"*, toda vez que, se repite, para el año 2012 el municipio estaba a cargo de la administración de los recursos del SGP-APBS.

Con fundamento en lo expuesto, se confirma que este criterio no lo cumplió el municipio.

4.3. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito: Reporte al SUI del Acuerdo Municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva

El municipio reconoció en su recurso que el Acuerdo N° 13 del 19 de Mayo de 2012, por el cual fue aprobado el porcentaje de subsidios y contribuciones para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, no fue expedido conforme a la Ley 1450 de 2011, puesto que señaló el porcentaje de contribución en un 10% para los estratos 5, 6, industrial y comercial; y para tal efecto aclaró en su alegato, que dicho acto fue modificado por el Acuerdo 009 de mayo de 2013, acto que aportó como prueba con el radicado SSPD 20145290207492, del 28 de abril del año en curso, mediante el cual adicionó lo argumentado con el escrito inicial del recurso interpuesto.

Ahora bien, el referido Acuerdo allegado como prueba, no modifica la postura señalada por esta entidad en la resolución recurrida, toda vez que fue expedido el **25 de mayo de 2013**, y por consiguiente, los porcentajes de subsidios y contribuciones allí fijados, no se aplicaron para la vigencia 2012 que es objeto de revisión por parte del presente proceso de certificación, toda vez que dicho acto rige hacia el futuro a partir de su sanción. (Artículo 5 del Acuerdo No. 009 de 2013).

En consecuencia, se confirma el análisis efectuado en la resolución atacada, en cuanto al acuerdo de aprobación de subsidio y aporte solidario para el municipio de Gachalá.

Ahora bien, como el ente municipal no pudo acreditar el criterio de la forma descrita, se entra a analizar si con lo alegado en su recurso, cumplió con el reporte en el SUI el formato Balance Subsidios y Contribuciones de la vigencia a certificar.

La parte recurrente manifiesta que atendiendo las consecuencias de la desertificación para la vigencia 2011, el departamento de Cundinamarca asumió la administración de los recursos del SGP, *"fuente de la cual se tomaban los soportes presupuestales para el pago de los subsidios a la Oficina de Servicios Públicos del municipio"*, razón por la que solo se generó cuenta de cobro en el mes de julio del año 2013 para el pago de los subsidios correspondientes al periodo de la vigencia 2012, *"recursos que como ya se dijo fueron girados hasta el mes de octubre de 2013."*

Que por la anterior situación, el municipio solicitó el 30 de agosto de 2013 al coordinador del Grupo SUI, la reversión del *"formato balance entre subsidios y contribuciones"*, la cual fue aprobada de acuerdo a los datos presentados; sin embargo, señala el recurrente, al cargar los datos y valores el sistema no los validó.

En relación con los argumentos que expone el ente municipal, esta superintendencia retoma lo señalado en párrafos precedentes, es decir, que para la vigencia 2012 el municipio de Gachalá administraba los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, ya que los efectos de la desertificación de la vigencia 2011 entraron a regir a partir de año 2013. Por lo tanto, el ente territorial debió cumplir con su obligación de reportar al SUI los requisitos mencionados en el Decreto 1639 de 2013, entre ellos, reportar el formato de subsidios y balances, vigencia 2012, sin embargo no lo hizo y por consiguiente, el requisito no lo acreditó.

Adicionalmente reiterarse que el giro de subsidios que realizó el departamento de Cundinamarca a la Oficina de servicios públicos de Gachalá, en el mes de octubre de 2013, fueron para los subsidios del año 2013 y no para los subsidios del año 2012, según se observó en la certificación del departamento anexa como prueba en esta actuación; de ahí que la exculpación del municipio referida a que por la fecha de

ese giro (octubre de 2013) "ya no permitan realizar el aporte de pruebas para el proceso de certificación", no es de recibo por esta entidad.

4.4. De las solicitudes de aclaración por parte del recurrente.

4.4.1. El recurrente solicitó se le aclarara por qué en la resolución recurrida no se incluyó el literal c) del artículo 3, relacionado con reporte al SUI de la " *Certificación emitida por el prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en donde certifique el monto de los recursos destinados al pago de los subsidios en la respectiva vigencia*", ya que afirma que esta " *opción no se permite cargar en el aplicativo SUI y no fue considerada en la presente resolución*".

Para dar respuesta a la inquietud planteada por el impugnante, esta superintendencia le informa que el referido literal c) fue analizado en el acto administrativo recurrido, nótese:

20144010025435

Página 1 de 4

Continuación de la resolución por la cual se decide sobre la certificación para la administración del
SCP-APFSB vigencia 2013

1. En cuanto al aspecto de destinación y giro de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico, de acuerdo con la información recibida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, el municipio cumplió con el reporte al FUT de las categorías de ingresos y gastos de la vigencia 2012, de los Recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico.

2. Respecto al reporte de la creación del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos FRSRI, el municipio reportó en el SUI el Acuerdo Municipal No. 16 del 10 de septiembre de 1999, a través del cual fue creado el FRSRI para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Por su parte, se verificó que el municipio no cumplió con la puesta en funcionamiento del FRSRI, puesto que:

- En el formato "Certificación asignación de recursos FRSRI AAA PDF" del SUI, el municipio reenvió una certificación expedida por el secretario de hacienda municipal en la que señala que los recursos de subsidios presupuestados no fueron girados a la Oficina de Servicios Públicos de Gachala.

En efecto, se analizó dicho requisito de acuerdo con la información que el municipio cargó en el SUI el día 04 de julio de 2013, tal y como se observa en el siguiente pantallazo:

ID	ALCALDIA	SERVICIO	FECHA DE CERTIFICACIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	ESTADO DE LA CERTIFICACIÓN	SERVICIO
10241	CUMBOBARACA	GACHALA	2012	Certificado	2013-07-01	CERTIFICACIÓN FRSRI AAA GACHALA
10241	CUMBOBARACA	GACHALA	2012	Certificado	2013-07-01	CERTIFICACIÓN FRSRI AAA GACHALA
10241	CUMBOBARACA	GACHALA	2012	Certificado	2013-07-01	CERTIFICACIÓN FRSRI AAA GACHALA

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el municipio ostenta la doble calidad de ente territorial y prestador de los servicios públicos, la certificación expedida por el tesorero municipal es la misma

certificación del prestador sobre el giro de subsidios, la cual, tal como lo señala en artículo 3° del Decreto 1639 de 2013, debía ser reportada en el SUI a través del formato "Certificación asignación de recursos FSRI AAA", que se encuentra habilitado en el tópico comercial, de cada uno de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, ingresando con el usuario y la contraseña asignada al municipio como entidad territorial.

Por lo anterior, la afirmación del recurrente no tiene fundamento porque se demostró que el ente territorial cargó en el SUI la certificación del prestador de los servicios a que se refiere el literal c) del numeral ii) del artículo 3° del Decreto 1639 de 2013, que dicha certificación se valoró y plasmó en la resolución recurrida y que si se encuentra habilitado el formato para reportarla en el SUI.

4.4.2. Manifiesta el representante del municipio que si no se "contaba" con el acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia 2012 y las respectivas acreditaciones para certificar este requisito; *"sin que se haya tenido en cuenta las solicitudes y comunicados enviados en su momento por la Alcaldía, como parte del debido proceso"*.

Al respecto debe indicarse que el Decreto 1639 de 2013 en su artículo 3, estableció que para asegurar el equilibrio entre subsidios y contribuciones para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los municipios y distritos del país de categorías 4, 5 y 6, debían reportar al SUI el Acuerdo Municipal de aprobación de porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la respectiva vigencia, el cual debía estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011; y que:

"En caso de no poder acreditar el criterio de la forma descrita, podrá:

- a) Reportar en el SUI el formato Balance Subsidios y Contribuciones de la vigencia a certificar, o,*
- b) Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios en la vigencia a certificar".*

Nótese que el Decreto dispuso que en el evento que el ente territorial no cumpliera con el requisito principal (el Acuerdo Municipal), tenía la opción de acreditar el equilibrio entre subsidios y contribuciones con uno de los dos requisitos subsidiarios mencionados, sin que reglamentara que se pudiera eximir de su cumplimiento al municipio o distrito que no acreditara lo exigido, ya que la consecuencia de ello es la descertificación en la administración de los recursos del SGP-APSB.

Por lo anterior, la defensa esgrimida por el municipio antes de la expedición del acto recurrido, frente al incumplimiento de los requisitos aquí analizados, no pueden tenerse como válida, toda vez que la superintendencia dentro de su órbita de competencia tiene la función de verificar que los municipios acrediten todos los criterios señalados en el Decreto 1639 de 2013, pero no tiene la facultad de excluir el cumplimiento de requisitos, ya que con ello estaría modificando lo expresamente ordenado por la Ley.

Así mismo, cuando este ente de control le informó en sus respuestas al municipio, que la SSPD en virtud del proceso de certificación podía *"solicitar soportes adicionales, confrontar información reportada con las fuentes y adelantar la constitución de pruebas adicionales para la verificación de la información reportada"*, lo hizo con el objeto de comunicarle que así procedería si necesitaba establecer que el municipio cumplía con los criterios que le eran exigidos, pero no para verificar que no los acreditaba como parece entenderlo de forma el recurrente.

Respecto al debido proceso que señala el recurrente, esta superintendencia inicia señalando que el artículo 29 de la Constitución Política, consagra el derecho al debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; ahora bien, esta garantía procesal reconocida a la persona (natural o jurídica, pública o privada), tiene como finalidad que no pueda resultar sancionada o perjudicada por decisiones de la autoridad que desconozcan las oportunidades establecidas por la ley para intervenir y defenderse.

Teniendo como pilar de las actuaciones administrativas, como la que nos ocupa, el respeto por el debido proceso, consideramos pertinente realizar la siguiente citada la Honorable Corte Constitucional, la cual se ha pronunciado en los siguientes términos:

"Esta Corporación ha definido el debido proceso administrativo como "(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal". Lo anterior, con el objeto de "(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados". (Corte Constitucional, actuación T-2.897.231, Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, fallo del 16 de diciembre de 2011).

Igualmente, esa Corporación expresó, que: *"(...) el debido proceso administrativo como derecho fundamental se manifiesta a través de un conjunto complejo de principios, reglas y mandatos que la ley le impone a la Administración para su ordenado funcionamiento (entre otros, se destacan las disposiciones previstas en el artículo 209 de la Constitución y en el capítulo I del Título I del C.C.A., referente a los principios generales de las actuaciones administrativas), por virtud de los cuales, es necesario notificar a los administrados de las actuaciones que repercutan en sus derechos, otorgarles la oportunidad de expresar sus opiniones, y de presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus derechos. Actuaciones que, en todos los casos, deben ajustarse a la observancia plena de las disposiciones, los términos y etapas procesales descritas en la ley". (Corte Constitucional. Sentencia T-1162 de 2005. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto).*

En este sentido, el máximo Tribunal Constitucional de nuestro país, en la citada sentencia T-2.897.231 de 2011, señaló que son garantías del debido proceso administrativo, entre otras, las siguientes: (a) el derecho a conocer el inicio de la actuación, (b) a ser oído durante todo el trámite, (c) a ser notificado en debida forma, (d) a que se adelante por autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio, (e) a que no se presenten dilaciones injustificadas, (f) a gozar de la presunción de inocencia, (g) a ejercer los derechos de defensa y contradicción, (h) a presentar pruebas y a controvertir aquellas que aporte la parte contraria, (i) a que se resuelva en forma motivada la situación planteada, (j) a impugnar la decisión que se adopte y a promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso.

Teniendo como base el marco descrito, revisado el procedimiento llevado a cabo por esta superintendencia, el cual terminó con la descertificación del municipio de GACHALÁ, mediante la Resolución No. SSPD 20144010005435, cumple a cabalidad con los presupuestos exigidos por la norma constitucional y jurisprudencia, acerca de las garantías que aseguran el debido proceso, a saber:

Al ente territorial se le comunicó oportunamente del procedimiento y requisitos para obtener la certificación en mención, con el documento No. SSPD 20134010150351 del 27 de marzo de 2013 y con el auto de apertura del proceso SGP, número SSPD 20134010018676 del 20 de septiembre de 2013, fue comunicado al municipio con oficio SSPD 20134010618821, y remitido por correo el 27 de septiembre de 2013, el inicio del proceso administrativo que nos ocupa.

De otra parte, esta entidad le brindó la oportunidad al municipio de ser oído antes de tomar la decisión, así como se le permitió participar en el proceso de certificación, dentro del cual pudo solicitar y aportar las pruebas que le interesaran para efectos de lograr la aludida certificación.

Una vez expedida la Resolución de descertificación, este acto administrativo fue debidamente motivado, y notificado a los interesados de conformidad con los presupuestos de Ley, para lo cual se le brindó al ente territorial la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y por consiguiente, de impugnar la decisión, al advertirle que contra la decisión adoptada procedía el recurso de reposición, recurso que aquí se decide.

Igualmente debe señalarse que esta superintendencia es la autoridad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*; procedimiento de certificación, que no presentó dilaciones injustificadas, como quedó visto.

Así pues, resulta claro que la Resolución No. SSPD 20144010005435, del 7 de marzo de 2014, no es un acto violatorio del debido proceso, y por el contrario, constituye una muestra evidente de su desarrollo y de la aplicación de los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción que rigen las actuaciones administrativas.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento de los requisitos que se le demanda; por lo tanto el recurso formulado por el señor Pedro Antonio Rodríguez Rojas, como alcalde municipal de GACHALÁ, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20144010005435 del 7 de marzo de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de GACHALÁ, del departamento de CUNDINAMARCA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de CUNDINAMARCA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra la misma no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Ingrid Samantha Norato - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e Información

Visto Bueno: Lida Ruiz - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 20094012574580596A